



Todas las Mancomunidades RSU de Castilla y León

Expedientes: ACTUACIONES DE OFICIO 1055/2022 a 1063/2022

Asunto: Residuos urbanos/ Recogida separada de textiles, aceite de cocina y residuos domésticos peligrosos/ Situación en Castilla y León

Ilmo. Sr.:

Nos dirigimos a V.I. en relación con el expediente de oficio que se tramita en esta Institución con el número arriba indicado, referencia a la que rogamos haga mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

Como quizá conoce, esta Institución está muy interesada por las cuestiones que tienen relación con la contaminación en general y más específicamente por la que se genera por los residuos y vertidos urbanos.

En este sentido, en los últimos años venimos observando un crecimiento exponencial de la conciencia y reivindicación de los ciudadanos en relación con la necesidad de afrontar la disminución de los efectos contaminantes derivados de todo tipo de actividades humanas y esta reivindicación se suele dirigir a los Ayuntamientos como Administración más cercana, reclamando la adopción de todo tipo de medidas que puedan contribuir a construir, entre todos, una forma de vida más saludable y un entorno más sostenible.

Obviamente, concienciación, educación y medios son los pilares que hacen posible que la ciudadanía se incorpore, en el desarrollo de su vida diaria, al compromiso plasmado en el artículo 45 de la Constitución de 1978 y en el artículo 16.15 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, como garantía del derecho de todos a vivir en un medio ambiente más adecuado.

Resulta incuestionable que la sociedad actual genera una gran cantidad de residuos debido fundamentalmente al modelo de producción y consumo de bienes y servicios. La Unión Europea, que siempre se ha mostrado muy sensible en relación con la gestión de residuos urbanos, viene marcando desde hace años unos objetivos ambiciosos de reducción, priorizando la minimización y valorización de los mismos mediante un



impulso eficaz de las operaciones de recogida selectiva, separación, reciclaje y reutilización de los residuos como recurso.

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, denominada Directiva marco de Residuos (en adelante DMR), y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que incorporó sus determinaciones a nuestro ordenamiento jurídico, fijaron determinados objetivos en relación con la prevención y generación de residuos que se plasmaron en planes y programas de gestión.

Así las cosas, el 30 de mayo de 2018 se aprueba la **Directiva 2018/851**, que viene a modificar algunos aspectos de la DMR, buscando mejorar la gestión de los residuos, singularmente aquellos que tienen valor como recurso, e insistiendo en la necesidad de aumentar los índices de preparación para la reutilización y el reciclado.

Para ello indica a los Estados miembros que deben garantizar un mejor cumplimiento de la obligación de recoger los residuos de forma separada, incluida la obligación de establecer una recogida independiente para papel, metal, plástico y vidrio (que se debía cumplir en 2015) e introducir la recogida separada de los biorresiduos, residuos peligrosos de origen doméstico¹ y residuos textiles.

En este contexto se aprueba la **Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (en adelante Ley de Residuos)** que, en lo que resulta de interés para esta actuación de oficio, fija calendarios de cumplimiento obligatorio para establecer recogidas separadas de nuevos flujos de residuos como textiles, domésticos peligrosos, aceites de cocina usados y biorresiduos, lo que sin duda impactará en la organización de este servicio público y en todos los ciudadanos, por la necesidad de atender a los nuevos sistemas que se implanten y por la mayor presencia de dispositivos de recogida en las calles.

De hecho, la propia Directiva 2018/851 reconoce que los retos que plantea la gestión de los residuos urbanos radican en la gran diversidad y complejidad de su composición, en su proximidad a los ciudadanos, en su marcada visibilidad pública y en su repercusión en el medio ambiente y la salud humana.

Todas estas razones nos impulsaron a actuar de oficio para conocer la situación en la que nos encontramos en nuestra Comunidad en cuanto a la implantación de métodos de recogida y gestión de estos concretos residuos, en un intento de reconocer los puntos débiles de los sistemas establecidos, comparar y compartir las soluciones implantadas, así como plantear posibles alternativas, contribuyendo así a intentar mejorar la prestación de

¹ La Directiva 2018/851 incluye en esta definición, pinturas, barnices, disolventes o productos de limpieza, pilas y acumuladores de origen doméstico y también aparatos eléctricos y electrónicos.



este servicio público esencial, así como a alcanzar los objetivos de reciclaje, reutilización y reducción, que fija la reciente Ley de Residuos.

Por ello, en su momento, nos dirigimos a todos los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de nuestra Comunidad y a todas las Diputaciones provinciales requiriendo información sobre las cuestiones que pretendíamos abordar en estas actuaciones de oficio.

De entre los datos obtenidos; que sirvieron de fundamento a las resoluciones que formulamos a las administraciones concernidas y cuyos textos íntegros pueden ser consultados en nuestra página web si ese es su interés; destacaba de forma muy evidente un dato que ya conocíamos al través del trabajo diario que desarrolla esta Defensoría y es que los municipios de nuestra Comunidad, mayoritariamente, se han agrupado en mancomunidades para la prestación de este servicio esencial de competencia municipal, y por ello serán estas Mancomunidades de municipios las encargadas de atender las nuevas demandas ciudadanas en esta materia, así como las responsables de organizar y gestionar, de la manera más eficiente posible, los requerimientos que se recogen en la nueva Ley.

Por ello queremos transmitirle, mediante esta resolución, parte de las consideraciones y reflexiones que hemos efectuado a los municipios, al tiempo que le instamos a seguir colaborando y cooperando con los que forman parte de esa Mancomunidad en la consecución de los objetivos que persigue la norma, siempre teniendo en cuenta las competencias específicas que haya asumido cada mancomunidad. Indicarle, además, que esta misma resolución se ha dirigido a todas las Mancomunidades de Municipios de Castilla y León, que prestan, como la que V.I. preside, el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Como habitualmente recordamos, la recogida de los residuos urbanos es, en la actualidad, algo más que la simple prestación del servicio y la retirada de los desechos de los comercios y de los hogares para dirigirlos a su destrucción en vertedero.

Los ciudadanos y también las entidades locales están afrontando importantes cambios en los sistemas tradicionalmente establecidos puesto que la gestión de los residuos se dirige, en este momento, hacia la construcción de un modelo sostenible de economía circular, en la que habrá que cumplir unos estrictos niveles de reutilización y valorización de los residuos generados en todos los ámbitos de la actividad humana, y más concretamente, por lo que resulta de interés en esta actuación de oficio, en los hogares, lo que incide de manera directa en las responsabilidades de las Administraciones que ostentan competencias en esta materia.

En este sentido y con carácter general, la nueva Ley de Residuos refuerza la aplicación del llamado principio de jerarquía de residuos, mediante la **obligatoriedad** por



parte de las entidades locales de usar todo tipo de instrumentos para su efectiva consecución, incluidos los instrumentos económicos (artículos 11.3 y 4 de la Ley de Residuos).

Puesto que son varias las administraciones públicas que intervienen en la gestión de los residuos, en el artículo 12 se definen las competencias administrativas de cada una de ellas, especificando las correspondientes en materia de economía circular.

Así el artículo 12.5 de señala:

“Corresponde a las entidades locales:

a) como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos domésticos en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas, de conformidad con el marco jurídico establecido en esta ley, en las leyes e instrumentos de planificación que, en su caso, aprueben las Comunidades Autónomas y la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor.

A estos efectos deberá disponer de una red de recogida suficiente que incluirá puntos limpios, o en su caso, puntos de entrega alternativos que hayan sido acordados por la entidad local para la retirada gratuita de los mismos. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada, conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población de derecho superior a 5.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos.

c) Recopilar, elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación en materia de residuos y suministrarla a las comunidades autónomas, en particular la información relativa a los modelos de recogida, los instrumentos de gestión, a las cantidades recogidas y tratadas (...).

d) Ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.

e) Además podrán:

1º Elaborar estrategias de economía circular, programas de prevención y para las entidades locales con una población de derecho inferior a 5.000 habitantes, programas de gestión de los residuos de su competencia.



2º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas (...).

3º A través de las ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o residuos cuyas características dificultan su gestión a que se adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y el lugar adecuados

4º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante la asociación de varias entidades locales” (El subrayado es nuestro).

Como ya hemos anticipado, entre los objetivos básicos de la política de residuos que fijaba la Unión Europea en la DMR, y que se ha venido manteniendo en todas las normas que se han aprobado con posterioridad, se encuentran la prevención en la generación de residuos, así como la promoción de su reutilización, reciclaje y la recuperación, para reducir así el impacto ambiental que su gestión provoca.

Para alcanzar estos objetivos la DMR y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011 contemplaban, entre otras medidas, la elaboración de planes locales de prevención de residuos municipales como instrumento normativo necesario para cambiar el modelo de gestión de residuos a nivel local, en el entendimiento de que la prevención es la mejor opción de gestión, seguida, por este orden, de la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, siendo el depósito en el vertedero la última de las opciones a utilizar para la eliminación de los residuos.

Así, el artículo 15.1 de la Ley 22/2011 definía cual debía ser el objetivo principal en relación a la prevención en los diferentes ámbitos competenciales, señalando que: *“Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, aprobarán antes del 12 de diciembre de 2013, programas de prevención de residuos en los que se establecerán los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes (...).”*

Por lo tanto, observamos como a nivel estatal el objetivo del establecimiento de una jerarquía en la gestión de los residuos era desplazar la mayor parte de las actuaciones en esta materia hacia los escalones superiores de la misma, siendo la prevención en la generación de residuos la primera prioridad en orden a la adaptación de cualquier modelo de gestión, puesto que resultaba ser la opción ambiental y económicamente más sostenible.

A nivel autonómico, mediante Decreto 11/2014, de 20 de marzo, se aprobó el Plan Integral de Residuos de Castilla y León (en adelante PIRCYL) y lógicamente en



coherencia con lo establecido en la Ley 22/2011, también aludía a la prevención en la generación de residuos como una de sus prioridades, mencionándola tanto en sus objetivos estratégicos, como en todos sus programas y líneas de actuación.

Además, el PIRCYL asumía la importancia de la realización de programas de prevención en el ámbito local, al incluir entre las medidas previstas en la línea de actuación P03.03 *“Fomentar la realización de planes de prevención en las entidades locales, bien sea de manera individual o agrupada, mediante la celebración de charlas y la edición de una guía básica para facilitar su elaboración”*.

Pese a lo ambicioso de la normativa nacional y autonómica, prácticamente no se han elaborado planes de prevención en la generación en nuestra Comunidad Autónoma, y nos consta, salvo error, que únicamente la ciudad de Burgos ha aprobado un programa al efecto.

La nueva Ley de Residuos, en su artículo 14, vuelve a instar a las autoridades competentes para que se doten de programas de prevención de residuos, apuntando de manera directa a los programas específicos dirigidos a la prevención de desperdicio alimentario y medidas dirigidas a la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, extremo que deberá tener muy presente esa Mancomunidad, puesto que resulta necesaria la existencia de tales planes para establecer con claridad el volumen y naturaleza de los residuos que se producen en su ámbito competencial, al objeto de poder intervenir en su generación y adecuar la organización de la totalidad del servicio.

Por otra parte, la disposición final octava de la reciente Ley de residuos establece que *“las entidades locales aprobarán las ordenanzas previstas en el artículo 12.5 de esta Ley a partir de la entrada en vigor de la misma, de manera que se garantice el cumplimiento de las nuevas obligaciones relativas a la recogida y gestión de los residuos de su competencia en los plazos fijados. En ausencia de las mismas se aplicarán las normas que aprueben las comunidades autónomas”*.

Resulta necesario que exista un instrumento normativo que regule todas aquellas actividades dirigidas al depósito y a la recogida de los residuos que evite, en primer lugar, que los mismos se generen o se minimice su producción, y cuando esto no resulte posible, que facilite su gestión mediante la preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización, de manera que se reduzca el depósito en vertederos, en línea con los objetivos que marca la Ley de Residuos. La ordenanza deberá contener disposiciones específicas en cuanto a la recogida separada, señalando con claridad y en cada uno de los casos el lugar y forma en la que los ciudadanos deben depositar los mismos, y el régimen sancionador aplicable a los posibles incumplimientos.



En lo que atañe más estrictamente a la gestión de los residuos generados a nivel local, y siguiendo estrictamente la jerarquía en la gestión de residuos, los artículos 24 y siguientes de la Ley suponen un análisis de las medidas de preparación para la reutilización, reciclado y valorización de los residuos.

En este sentido y para facilitar la preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad, la Ley de residuos señala que las entidades locales **deben facilitar, antes del 31 de diciembre de 2024**, la recogida separada de distintas fracciones de residuos de competencia local, entre otras, las que nos han ocupado de forma más específica en estas actuaciones de oficio y cuya gestión abordaremos individualmente.

Respecto de la recogida de residuos textiles.

De entre las modificaciones que se introdujeron en la DMR por la posterior Directiva 2018/51 destacan, por lo que resulta de nuestro interés, las que contemplan medidas directas sobre el residuo textil. En concreto, el artículo 11 contempla la obligatoriedad de la recogida separada del residuo textil, estableciendo como fecha límite el 1 de enero de 2025.

Esto implica que todos los municipios europeos de cualquier tamaño deberán disponer de lugares específicos para depositar la ropa de la que sus vecinos quieran deshacerse. Considerando que mediante la recuperación separada del residuo textil se consiguen evidentes beneficios para el gestor local ya que, por un lado se reduce el volumen global de los residuos depositados en la fracción resto, con importantes mejoras para el tratamiento en planta, y por otro se posibilita la reutilización y la recuperación de este tipo de materias primas que tienen un cierto valor económico.

La opción de recogida de esta fracción más extendida en nuestro país, y también en nuestra Comunidad Autónoma, es la de colocación de contenedores en la vía pública, no obstante, existen otras opciones como la recogida puerta a puerta, la disposición únicamente en puntos limpios, o la recogida en puntos específicos (tiendas de segunda mano, lugares acordados con las organizaciones que gestionan este tipo de residuos, etc.)

Así, el anexo 1 del Plan nacional de Residuos Urbanos (2007-2015) ya preveía, dentro del programa de reciclaje, una dotación de al menos un contenedor de recogida de textiles por cada 3.000 habitantes.

La mayoría de los municipios de mayor tamaño de nuestra Comunidad ya tienen implantado este servicio, situando contenedores específicos en la vía pública. No obstante creemos que aún se deben efectuar mayores esfuerzos, sobre todo en los municipios medianos y pequeños, que deben generalizar la implantación de este servicio teniendo en cuenta para ello, lógicamente, las particularidades territoriales y sociales que puedan afectar a esta y a otras recogidas concretas en su territorio.



En este sentido la dispersión y el envejecimiento de la población residente en nuestra Comunidad puede limitar, en ocasiones, el adecuado depósito de este y otros residuos en los puntos limpios, si éstos se hallan alejados de los núcleos de población. Para suplir estas carencias resultan muy útiles las campañas de recogida puerta a puerta, o los puntos limpios móviles, puesto que acercan este servicio a los ciudadanos. Pueden planificarse “recogidas especiales” en los periodos de cambio de temporada, en la medida en que suele haber una mayor recogida de residuo textil, o en cualquier otro momento en el que se detecte una mayor necesidad, por el retorno a las primeras o segundas residencias o por cualquier otra circunstancia.

Respecto de la recogida de aceite usado doméstico.

El aceite vegetal tiene un gran uso en los hogares, centros e instituciones, hostelería, restauración, etc. Una parte importante del aceite, sobre todo el que se utiliza en los procesos de fritura, sufre cambios químicos que hacen necesario su desecho, normalmente a través de las empresas gestoras autorizadas. Si de forma inadecuada los aceites usados de cocina se vierten por el fregadero o por el inodoro son una fuente de grave contaminación y provocan serios problemas en las redes de saneamiento, ya que al unirse a los restos de detergentes y jabones de uso doméstico provocan las llamadas “bolas de grasa”, que pueden provocar importantes atascos en los colectores.

Un litro de aceite usado puede contaminar, según algunos estudios, hasta 40.000 litros de agua, que es el equivalente al consumo de agua anual de una persona en su domicilio, y de ahí que su vertido incontrolado es una práctica que debe desaparecer totalmente de nuestros hogares.

Esto pasa por su entrega a los sistemas de recogida habilitados, aunque precisamente es en el ámbito doméstico donde la recogida resulta más difícil: en primer lugar porque las cantidades a recoger son menores y, por otro lado, porque se requiere la implicación de las Administraciones responsables para la implantación y adecuada distribución de los contenedores, así como para mejorar el conocimiento de los beneficios directos o indirectos que supone esta recogida con objeto de fomentar la necesaria colaboración ciudadana.

Sabemos, por la información recogida, que muchos Ayuntamientos y Mancomunidades ya prestan este servicio a través de la instalación de contenedores específicos, situados en la vía pública, y repartidos por distintas localizaciones, además de atender este servicio en los puntos limpios.

La principal problemática que se detecta respecto de la ubicación de estos dispositivos es la de su situación cerca de cauces de agua, rejillas o imbornales, ya que si se produce un derrame accidental de su contenido se podría contaminar la red de



saneamiento. Tampoco se deben ubicar cerca de zonas verdes, y debe promoverse siempre situarlos en una plataforma estable, construida de material impermeable. En caso de derrame accidental en las labores de depósito y/o recogida, debe efectuarse una limpieza rápida de la zona, para evitar posibles accidentes.

Respecto de la recogida de residuos domésticos peligrosos y los puntos limpios.

Como sabe, dentro de los residuos domiciliarios existe una fracción que por sus características de peligrosidad, volumen y frecuencia de generación se pueden clasificar como especiales.

La Directiva 218/851 se refiere a estos residuos, enumerando las pinturas, barnices, disolventes o productos de limpieza. También se incluyen en esta categoría los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE) que incluyen aparatos domésticos y electrodomésticos de todos los tamaños, lámparas, monitores, equipos informáticos, etc., también pilas y baterías, residuos de construcción y demolición, muebles, maderas y similares.

Se trata de residuos peligrosos porque en algunos supuestos las sustancias contenidas en estos residuos domésticos son inflamables, corrosivas y/o explosivas. En otros casos, se trata de residuos nocivos para el agua o para el suelo, de ahí que resulte preferible que su recogida se realice en los llamados puntos limpios, puesto que estas instalaciones suelen contar con una zona cubierta y con pavimento o solera impermeable, que puede resistir a las propiedades físico-químicas de muchos de los residuos que allí se almacenan, aunque se encuentren muy degradados.

En concreto y respecto de la recogida de RAEE, el RD 110/2015 de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, establece las condiciones para las instalaciones y procedimiento de almacenamiento de los RAEE, que resultan de obligada aplicación a los puntos limpios municipales, entre las que se encuentran determinaciones en cuanto a las superficies impermeables, depósito en jaulas, sistemas que impidan su manipulación o rotura, etc.²

El incremento que se espera en el depósito de determinados residuos por la obligada recogida separada de residuos domésticos peligrosos que plantea de nueva Ley de Residuos en el horizonte del año 2024, chocará, probablemente, con el número de puntos limpios con los que cuentan las entidades locales y con la habitual lejanía de estas instalaciones de los ciudadanos que demandan su uso.

² La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ofrece en su página web <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/manual-buenas-practicas-para.html>, un manual de buenas prácticas para la explotación de este tipo de infraestructuras en nuestra Comunidad.



El Plan Nacional Integrado de residuos 2007-2015 ya establecía la obligatoriedad de disponer de al menos un punto limpio en los municipios de más de 5.000 habitantes antes del año 2010 y en los de más de 2.000 antes del año 2015, ratio que viene cumpliendo en prácticamente la totalidad de nuestra Comunidad, si bien algunos ayuntamientos han puesto de manifiesto las dificultades que sufren a la hora de atender las aportaciones de los vecinos residentes en municipios colindantes que no cuentan con este tipo de infraestructuras, lo que en determinados momentos ha llevado a algunas Administraciones a limitar la cantidad de residuos depositados o a rechazar determinados aportes, con el riesgo que esto supone que estos residuos acaben en la fracción resto o abandonados en lugares inadecuados.

En relación con esta cuestión debemos señalar que en el curso de las actuaciones de oficio que hemos promovido también nos hemos dirigido a todas las Diputaciones provinciales de nuestro ámbito territorial, reclamando de estas Instituciones un mayor compromiso con este servicio en los municipios más pequeños y una mayor colaboración con las mancomunidades de las que estos municipios forman parte, de manera que toda la población, resida en el municipio que resida, pueda recibir una prestación del servicio similar, aunque lógicamente la misma pueda estar condicionada por la situación geográfica, económica y/o social de la localidad, pero sin que esto suponga que no se reciba el servicio o no se atiendan los nuevos requerimientos que el mismo comporta.

Respecto de las campañas de información dirigidas a los ciudadanos.

La nueva Ley de Residuos, en su artículo 18, realiza una enumeración de las medidas que pueden adoptar las autoridades competentes para la prevención de la generación de residuos, entre las que destaca el desarrollo de campañas informativas de sensibilización sobre la prevención de residuos y el abandono de la basura dispersa.

La necesidad de recoger selectivamente otras fracciones de residuos requiere de una adecuada planificación, en especial si solo se dispone su recogida en puntos limpios, o si se requiere la nueva instalación de contenedores en la vía pública, para facilitar la labor de separación que deben realizar los ciudadanos y evitar depósitos inadecuados y/o abandono de residuos de todo tipo en el exterior de los dispositivos.

Todas las acciones que se lleven a cabo deben ir acompañadas de campañas de información y sensibilización, para asegurar la correcta participación de todos los agentes implicados, ya sean los ciudadanos, los comercios, los grandes generadores de residuos o los establecimientos colaboradores.

La Administración local debe conocer cuál es la predisposición de los usuarios a los cambios previstos, con la finalidad de adoptar las medidas oportunas para cubrir las



carencias que en cada caso se detecten. Separar un residuo puede suponer contar con un contenedor más en el domicilio, una mayor ocupación de la vía pública o un aumento en la tasa de basuras, y estos cambios en ocasiones requerirán intensificar las labores de información y concienciación de los ciudadanos, para que estos se reconozcan en la colaboración que se solicita y se impliquen en la consecución de los objetivos perseguidos.

En este sentido, habitualmente recordamos que los instrumentos normativos no pueden ser la única medida a adoptar para lograr una adecuada gestión de los residuos urbanos, lo verdaderamente determinante es la conducta de los ciudadanos, cuya colaboración es imprescindible para la adecuada separación de los residuos y para su adecuado depósito en contenedores y/o en puntos limpios.

En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común, consideramos oportuno formular las siguientes **Recomendaciones:**

Que, por parte de la Mancomunidad de municipios que V.I. preside y si no se ha hecho aún, se valore la posibilidad de aprobar un Plan de prevención y/o gestión de residuos urbanos, que analice el volumen y naturaleza de los residuos producidos dentro de su ámbito competencial y, teniendo en cuenta sus características, garantice la adecuación de los circuitos de recogida y de los medios materiales y humanos que se emplean en el servicio.

Que se valore la necesidad de aprobar y/o adaptar las Ordenanzas con las que cuentan a las prescripciones establecidas en la nueva Ley de Residuos, para favorecer así su implantación y garantizar la consecución de los objetivos de gestión, reciclaje y valorización que en la misma se establecen.

Que, en su caso, se analice la adecuación, en cuanto a su número en relación con la población atendida, de instalaciones de recogida de residuos domésticos peligrosos, puntos limpios o eco-parques, con los que cuenta esa administración teniendo en cuenta para ello los nuevos flujos y el incremento en la recogida de estos residuos que se deberá atender.

Que, en su caso, se profundice en las campañas de sensibilización social y educación ciudadana, dirigidas a toda la población, mediante las que se promueva una participación más activa e informada en la implantación de nuevos flujos de residuos y/o de recogida selectiva y de separación domiciliaria de las distintas fracciones.



Que en todo caso se adopten, de forma coordinada con los Ayuntamientos que forman parte de esa Mancomunidad, las medidas necesarias para minimizar las molestias que eventualmente se generen por la implantación de un mayor número de dispositivos en la vía pública, atendiendo especialmente a los criterios específicos de ubicación en la recogida de aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos.

Esta es nuestra recomendación y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución.

Una vez realizadas las comunicaciones oportunas, se acuerda publicar la presente Recomendación en la página web de esta Institución, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN
Tomás Quintana López